



CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2008.

PROMOVENTE: CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNFEDERACIÓN
DE LA NACIÓN
DE ACUERDOS
CONTROVERSIAS
ACCIONES DE
ALIDAD

En México, Distrito Federal, a siete de abril de dos mil ocho, **se da cuenta al Ministro instructor Juan N. Silva Meza**, con el oficio y anexos de José del Carmen Escaloya Camacho, quien se ostenta como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, depositados en la oficina de correos de la localidad el diecinueve de marzo del año en curso, recibidos **el día dos de abril pasado a las dieciséis horas con cinco minutos**, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal y registrado con el número **17047**. Conste.

México, Distrito Federal, a siete de abril de dos mil ocho.

Visto el escrito y anexos del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, por el que promueve controversia constitucional en contra del Municipio de Comalcalco, de dicha entidad federativa, en la que impugna lo siguiente:

"La inconstitucionalidad de los hechos que de manera reiterada ha realizado el Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco, Tabasco y su presidente municipal, los que han tenido como finalidad impedir que los CC. MARTÍN OLÁN ARIAS, JOSÉ CORDOVA LEYVA, PATRICIO RUIZ PONS, MARÍA CRUZ MÉNDEZ LÓPEZ, SANTIAGO GARCÍA MÉNDEZ, AURELIO MORALES LÁZARO, CLERIDA DE LA CRUZ PALOMERA y YONDER VENTURA LEYVA, regidores del mencionado Ayuntamiento, ejerzan su cargo a plenitud y conforme a derecho, por lo que este H. Congreso del Estado de Tabasco en su carácter de parte actora en la presente Controversia Constitucional, solicita la suspensión de los actos que se narran en el Capítulo de Hechos en que se proporcionan los elementos para que ésta pueda ser concedida a efecto de que no se ponga en peligro o se afecte gravemente a la sociedad por las causas que a continuación se relatan:

El acto cuya invalidez se demanda y que invade la competencia de este H. Congreso, consiste en la celebración de sesiones del Cabildo del H. ayuntamiento del Municipio de Comalcalco, en las cuales de forma autoritaria, concreta y particular, se impidió el acceso a los CC. MARTÍN OLÁN ARIAS, JOSÉ CORDOVA LEYVA, PATRICIO RUIZ PONS, MARÍA CRUZ MÉNDEZ LÓPEZ, SANTIAGO GARCÍA MÉNDEZ, AURELIO MORALES LÁZARO, CLERIDA DE LA CRUZ PALOMERA y YONDER VENTURA LEYVA a efecto de que no

ejercieran sus respectivos cargos de regidores, ausencias que fueron registradas en las actas correspondientes a los días 28 de diciembre de 2007, 11, 27 y 29 de enero de 2008, en que se discutieron y votaron asuntos prioritarios del Municipio, excluyéndose a los citados regidores de manera intencionada, ya que con el auxilio de la policía municipal, el presidente municipal y primer regidor, ordenó que no se permitiera el acceso de los citados funcionarios, lo cual es del conocimiento de los pobladores del Municipio, las personas que se encontraban presentes en el lugar en cada ocasión en que se perpetraron los hechos, lo que se encuentra registrado mediante acta notarial, a la vez que fue hecho del conocimiento público a través de los medios masivos de comunicación, y todo con el afán de producir los efectos de un acto de persona jurídica colectiva –el Cabildo–, simulándose un acuerdo de voluntades inexistente, para dar pie a actos de tracto sucesivo, cuya concreción fue posible, al no encontrarse en el recinto, en contra de su voluntad, los regidores propietarios arriba mencionados, mientras que sus suplentes tácitamente y en el conocimiento de los sucedido, consintieron en usurpar sus cargos sin haberse concretado las hipótesis normativas para la suplencia, situación que equivale a la suspensión de facto de los cargos de regidores propietarios, cuando el único facultado para suspender o revocar el mando de alguno de los miembros del ayuntamiento por causas graves, siempre y cuando los afectados hayan tenido la oportunidad suficientes para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convenga, lo cual podrá realizar únicamente por acuerdo de los terceras partes de su Pleno, es este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco como se encuentra previsto en los artículos 115, fracción primera, párrafo tercero de la Constitución Política Federal; 36, fracción XXXII de la Constitución Política Local, y 59 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que estamos en presencia de una invasión arbitraria de la esfera de competencia de este Poder, acto que se reclama porque impacta en la Soberanía de este Poder Legislativo, la vida interna del Municipio, y afecta el régimen sobre el que sustenta la vida municipal, al darse ilegalmente en cuatro ocasiones la consumación de las sesiones del Cabildo de fechas 28 de diciembre de 2007, 11, 27 y 29 de enero de 2008, sin la presencia de todos los regidores propietarios, por causas que no tienen que ver con lo legal y constitucionalmente previsto en la materia.

Por lo arriba señalado, se solicita a la suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, que declare inválidos los actos arribas expuestos, ya que no debe permitir por parte de ningún ente, órgano o entidad, la trasgresión de esferas de competencia que constituyen violaciones a la Carta Magna como la consistente en la suspensión de facto de los integrantes del Cabildo sin la intervención del único facultado para poder efectuarla en cumplimiento a los presupuestos normativos que se encuentran previstos para el caso, ya que en su caso de que no se siente el precedente requerido, estos hechos pueden seguirse consumando impunemente en cualquier Municipio, afectando gravemente el orden constitucional de nuestra Nación.”

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
D.F.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Con apoyo en los artículos 4°, primero párrafo y 11, párrafos primero y segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, en términos de los preceptos legales que invoca y de conformidad con la documental que exhibe al efecto, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica en su demanda y como delegados a las personas que menciona.

Por otra parte, de la revisión integral de la demanda y sus anexos, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar de plano la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso, está plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la citada Ley Reglamentaria, en relación con los artículos 45, párrafo segundo, de la propia ley y 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, que en ese orden establecen:

“ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.

ARTÍCULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal,

✓

en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

ARTÍCULO 105. *La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:*

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre.

(...)

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.”

Del primero de los preceptos que anteceden, se advierte que la improcedencia de una controversia constitucional puede resultar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de la Materia, lo cual no implica necesariamente que deba estar contemplada en alguno de los supuestos previstos en dicho ordenamiento, pues puede derivar del conjunto de normas que rigen el sistema de control constitucional del que forma parte, toda vez que, en términos del artículo 1º de la propia Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá las controversias constitucionales a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece las bases de procedencia de ese medio de control constitucional, siendo aplicable, a este respecto, la tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación, son los siguientes:



[Handwritten signature]

0341



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia del juicio debe resultar de alguna disposición de esa ley, esto es, que sea consecuencia de la misma, sin que sea necesario que expresa y específicamente esté consignada como tal en alguna parte del ordenamiento, pues siendo la condición para que dicha causa de improcedencia se actualice, que resulte del propio ordenamiento, ésta válidamente puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que integran a la citada ley reglamentaria y de su interpretación, en lo que se refiere a la controversia constitucional, en tanto delinean el objeto y fines de la propia figura procesal constitucional, se revelen casos en que su procedencia sería contraria al sistema de control constitucional del que forman parte o de la integridad y naturaleza del juicio mismo.”

(Tesis P. LXIX/2004, visible en la página mil ciento veintiuno del tomo XX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

conocerá, en los términos que señale la Ley Reglamentaria de la Materia, de las controversias constitucionales que el propio precepto enumera y, en su penúltimo párrafo establece que las resoluciones que declaren la invalidez no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal.

Por tanto, los efectos de la sentencia que, en su caso, declare la invalidez de los actos impugnados, no podrían retrotraerse a la fecha de presentación de la demanda y tampoco podría restituirse a la parte actora el derecho que se estime violado, respecto de los efectos y consecuencias que pudieran haberse concretado en su perjuicio.

En el caso, el Congreso del Estado de Tabasco, en su escrito de demanda impugna, en esencia, “... la **celebración de sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco, en las cuales de forma autoritaria, concreta y particular, se impidió el acceso a los CC. MARTÍN OLÁN ARIAS, JOSÉ CÓRDOVA LEYVA, PATRICIO RUIZ PONS, MARÍA CRUZ MÉNDEZ LÓPEZ, SANTIAGO GARCÍA MÉNDEZ, AURELIO MORALES LÁZARO, CLERIDA DE LA CRUZ PALOMERA y YONDER VENTURA LEYVA, a efecto de que no ejercieran sus respectivos cargos de regidores... ausencias que fueron registradas en las actas correspondientes a los días 28 de diciembre de 2007, 11, 27 y 29 de enero de 2008, en que se discutieron y votaron asuntos prioritarios del municipio, excluyéndose a los citados regidores de manera intencionada, ya que con el auxilio de la policía municipal, el presidente municipal y el primer regidor, ordenó que no se permitiera el acceso de los citados funcionarios...**”

Lo anterior revela la existencia de un conflicto interno entre los integrantes del Ayuntamiento, que dio lugar a los hechos que invoca la parte actora, acontecidos los días





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

veintiocho de diciembre de dos mil siete y once, veintisiete y veintinueve de enero de este año, en cuanto aduce que el Presidente y el Primer Regidor, con el auxilio de la policía municipal impidieron el acceso a diversos regidores propietarios, lo cual motivó que asumieran el cargo los suplentes.

Los anteriores hechos que la parte actora califica como una "suspensión de facto de los cargos de regidores propietarios", incluidas las sesiones y actas de cabildo en las que aduce se les negó el acceso a los Regidores que menciona, no pueden ser materia de impugnación en esta controversia constitucional, en tanto se trata de situaciones de hecho, cuyos efectos y consecuencias no podrían ser reparados por la sentencia de invalidez que, en su caso se dicte, dada la prohibición constitucional y legal de darle efectos retroactivos.

En ese sentido, las conductas o hechos que se atribuyen a diversos integrantes del Ayuntamiento, respecto del ejercicio de las funciones inherentes a su cargo o como integrantes del órgano de gobierno municipal al que pertenecen, constituyen situaciones de facto, como el propio promovente las califica, que no es posible reparar mediante la declaratoria de invalidez que eventualmente pudiera establecer la sentencia que se llegare a dictar.

Por su contenido, resultan atendibles los criterios contados en la jurisprudencia y tesis aislada que en seguida se transcriben:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ EXCEPCIONALMENTE PUEDE SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 45

de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer párrafo, la regla general de que las sentencias pronunciadas en las controversias constitucionales surtirán sus efectos a partir de la fecha en que discrecionalmente lo determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su segundo párrafo, otro mandato de observancia igualmente genérica en el sentido de que la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios y disposiciones legales aplicables de esta materia; asimismo, el artículo 14 del mismo ordenamiento dispone que tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva; de todo lo cual se concluye que este Alto Tribunal, cualquiera que sea la materia, puede indicar en forma extraordinaria que la declaración de invalidez sea efectiva a partir de la fecha de la presentación de la demanda, cuando por virtud de la suspensión de los actos reclamados se hayan mantenido las cosas en el estado en que se encontraban al momento de la promoción de la controversia, o bien desde el momento en que se hubiese otorgado esa medida cautelar, cuando su concesión ocurrió con posterioridad a la presentación de aquélla."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: XXIII, Mayo de 2006, tesis: P./J. 71/2006, página 1377).





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



0343

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA LA APROBACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA O DE LA FEDERACIÓN, SI DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE EL PERIODO FISCAL EN EL QUE ESTUVO VIGENTE. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, determinó que en materia de controversias constitucionales se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo mencionado cuando la norma o acto impugnados dejan de producir los efectos que motivaron su promoción, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria. En esa tesitura, y en virtud de que los presupuestos de egresos de las entidades federativas y de la Federación tienen vigencia en el periodo fiscal de un año, es inconcuso que si en la controversia constitucional se reclaman los actos consistentes en la aprobación y orden de publicación de los decretos que los contienen, y durante el trámite del juicio concluye el periodo fiscal en el que estuvieron vigentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19,

fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que aquéllos habrán cesado en sus efectos.”

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: XXV, Mayo de 2007, Tesis: 2a. XLIV/2007, Página 1666).

De conformidad con los criterios jurisprudenciales transcritos y en términos del artículo 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, los efectos de la sentencia que, en su caso, declare la invalidez de los actos impugnados, no podrían retrotraerse a la fecha de presentación de la demanda y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, la cual es manifiesta e indudable, en virtud de que se advierte de la lectura de la demanda y sus anexos, de modo que, aun cuando se instaurara el procedimiento y se ofrecieran pruebas, no podría llegarse a una conclusión diversa, siendo aplicable la jurisprudencia número P./J.128/2001, de rubro: **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.”**



Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la Materia, se acuerda:

I. Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de controversia constitucional que hace valer Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco.

II. Notifíquese por lista y por oficio al promovente.



III. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

0344

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Juan N. Silva Meza**, quien actúa con el licenciado Marco Antonio Cepeda Anaya, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.



Esta hoja corresponde al proveído de siete de abril de dos mil ocho, dictado por el **Ministro instructor Juan N. Silva Meza**, en la controversia constitucional 43/2008, promovida por el Congreso del Estado de Tabasco. Conste. LAAR

A
C
U
E
R
D
O